

El costo fiscal del nuevo reajuste del sector público

Las posturas entre los trabajadores y el gobierno están alejadas. Por un lado, el sector público presentó una nueva propuesta que considera ahora un alza salarial de 7,2% nominal y 2,7% real (por sobre la inflación), mientras que Hacienda había puesto sobre la mesa como primera propuesta un incremento de 4,1% nominal.

CARLOS ALONSO

A las 16 horas de este jueves comenzó una nueva jornada de negociación entre el gobierno y el sector público para acordar una cifra de reajuste salarial. Hasta el cierre de esta edición todavía no había ninguna cifra adicional a las ya conocidas.

Así, por el momento, las posturas están alejadas. Por un lado, los trabajadores solicitaron un alza salarial de 7,5% nominal y 3% real (por sobre la inflación), mientras que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa como primera propuesta un incremento de 4,1% nominal, lo que significaría una pérdida de poder adquisitivo de 0,4 punto porcentual, considerando que a noviembre la inflación anual se ubicaría en 4,5%.

Esa propuesta, por ahora, está lejos de satisfacer las demandas de los trabajadores, por lo que esperan seguir negociando con el Ejecutivo para lograr un acercamiento.

Para los funcionarios del sector público, el piso que debe tener una oferta de Hacienda para recién comenzar a evaluarla, es que al menos cubra la inflación anual

que considere noviembre 2023 y noviembre 2024 y que según las estimaciones que han considerado rondaría el 4,5%. Plantean que a ello se le debe sumar un extra para recuperar el poder adquisitivo. Por lo mismo, para buscar acercamientos, el sector público bajó su propuesta de 7,5% a 7,2% nominal, lo que se traduce en una baja desde el 3% a 2,7% real.

Pese a las demandas de los trabajadores, un alza en sus remuneraciones tiene un impacto relevante en las finanzas públicas.

El economista del **OCEC-UDP**, Juan Ortiz, modeló escenarios posibles para tener un orden de magnitud del costo fiscal. Según los cálculos preliminares que hace el experto, un alza anual de 7,5%, que es lo que piden los trabajadores, implicaría un costo fiscal cercano a los US\$ 3.400 millones. Mientras que un alza acorde con el aumento esperado del IPC promedio de 2025, que es 4,2%, conllevaría un aumento de gasto nominal de US\$ 1.900 millones. El año pasado el costo fiscal, considerando solo el reajuste salarial, llegó a los US\$1.108 millones. ●

